



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós

21-090

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **IRMA DORA ECHAVARRIA CANO**
Demandado: **COLPENSIONES, COLFONDOS S.A, PORVENIR S.A. y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**
Radicado No.: 05001-31-05-**002-2018-00600**-01.
Tema: ineficacia traslado, vejez, perjuicios, inducción en error, retroactivo, costas
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

Link: [21-090 \(002-2018-00600\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

Conforme el poder allegado, se reconoce personería tanto al apoderado principal Dr. FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, representante legal para procesos de la firma PALACIO CONSULTORES S.A.S., como a la apoderada sustitutita Dra. YESSICA FRANCEDY ZAPATA RAMIREZ, identificados con la cédula de ciudadanía Nro. 71.379.806 y 1.037.612.627, y Tarjeta Profesional Nro. 198.214 y 260.650, para que continúen representando los intereses de Colpensiones.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 36** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita la demandante que tras la declaratoria de **NULIDAD** del traslado a las administradoras del RAIS, se tenga como válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad, ordenándose a COLFONDOS S.A. trasladar a Colpensiones la totalidad de los aportes, junto con sus rendimientos financieros, para efectos de ser imputados en la historia Laboral.

Así mismo, pretende que se condene a Colpensiones reconocer y pagar la PENSIÓN DE VEJEZ conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 de manera retroactiva desde el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, esto es a partir del 10 de mayo de 2016, junto con los INTERESES MORATORIOS que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en subsidio la INDEXACIÓN de cada una de las mesadas desde la fecha de cumplimiento de los requisitos.

De no prosperar la súplica anterior, solicitó que fueran las administradoras del RAIS las encargadas reconocer y pagar la prestación por vejez y los intereses deprecados, ADICIONAL al pago de la indemnización por perjuicios ocasionados.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 10 de mayo de 1959.
- ✓ Que inicialmente cotizó al ISS a través de su empleador POSTOBON.
- ✓ Que el 28 de febrero de 2001 se trasladó a Porvenir S.A. y el 16 de diciembre de 2005 a Colfondos S.A. (enlista la información suministrada y los aspectos que nunca le explicaron los asesores de cada fondo).
- ✓ Que el 15 de agosto de 2017 Colfondos le informó que, al no contar con el capital suficiente, podría obtener una pensión de vejez bajo la modalidad de garantía de pensión mínima, mientras que en el RPM podría acceder a una mesada de \$1'009.494, teniendo en cuenta un monto porcentual del 71%.
- ✓ Que a la fecha acredita más de 1.300 semanas lo que le permitiría acceder a la pensión de vejez a partir del 10 de mayo de 2016 con sujeción a lo previsto en la Ley 797 de 2003.
- ✓ Que mediante comunicación del 3 de marzo de 2017, Colfondos reconoció la garantía de pensión mínima, la cual no cobró dado el precario ingreso que tendría, por lo que se vio obligada a continuar laborando.
- ✓ Que el engaño de Porvenir la ha sumido en un estado constante de preocupación y desazón de cara a la perspectiva de pensionarse bajo unas condiciones desfavorables, situación que en

sumo grado contraría su proyecto de vida y el de su familia, lo que se traduce en la ocurrencia de un evidente perjuicio moral.

- ✓ Que los perjuicios materiales se encuentran cuantificados en el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado, que debían estar a cargo de la entidad generadora del daño, sumado a la mora en el pago de las mesadas, las cuales no ha podido disfrutar, además de los aportes innecesarios que debe continuar efectuando al sistema, lo que se traduce en un lucro cesante consolidado y futuro.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido. Inicialmente se pronunció Porvenir S.A, quien negó el incumplimiento de deber de información. Señaló que su afiliación fue efectiva para el 1 de abril de 2001, que siempre ha contado con un departamento especializado donde capacita a todos sus funcionarios y especialmente a sus asesores comerciales en los dos regímenes existentes dentro del sistema general de pensiones, para que puedan explicar de manera satisfactoria, las características, particularidades, bondades y limitaciones de ambos regímenes, siendo finalmente el afiliado quien elige vincularse o no al RAIS.

Por su parte COLFONDOS S.A. destacó, de un lado, que la vinculación se realizó conforme a la ley, y de otro, que la jurisprudencia ha sido clara en señalar como requisitos para el resarcimiento del daño moral, que este sea cierto, concreto y personal, que el padecimiento de la víctima o sus dolientes sea verdaderamente fundado, es decir no se puede atribuir la connotación de daño moral a ciertas molestias que ha tenido la afiliada con las AFP, máxime cuando estas le informaron y le explicaron las condiciones y características del RAIS.

Valga aclarar en este punto que dicha entidad presentó **demanda de reconvención** en contra de la señora IRMA DORA ECHAVARRIA CANO solicitando que se declare no procedente la ineficacia y/o nulidad de traslado realizado por la misma y que en el evento de que prospere dicha pretensión, se condene a la señora ECHAVARRIA a reintegrar a COLFONDOS S.A, las sumas de dinero que dicha sociedad le ha cancelado por concepto de mesadas pensionales, desde la fecha de reconocimiento de ese derecho, hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin el presente proceso además que dichas sumas sean indexadas. Afirma que la actora ya se encuentra disfrutando de una pensión por vejez a cargo de dicho fondo.

Frente a ello se pronunció la demandante reiterando lo expuesto en el libelo genitor relativo a la existencia de un vicio en el consentimiento, la nulidad y sus efectos, aceptando el reconocimiento de

la pensión, añadiendo que los trámites adelantados y la decisión tomada fue producto de un engaño, explicando la repercusión en su vida y el perjuicio moral.

Entre tanto, COLPENSIONES indicó que solo le constaban los hechos relacionados con la edad de la actora, su calidad de afiliada en el extinto ISS, la densidad cotizada en dicha entidad (497,71 semanas entre el 03/08/1979 y el 14/02/1989), el traslado al RAIS, no así las circunstancias específicas en que este se dio y la reclamación administrativa elevada.

Finalmente, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, vinculado ante la prosperidad de una excepción previa, se opuso a las pretensiones señalando que por disposición legal esa oficina respondía únicamente por la liquidación, emisión, expedición, redención, pago o anulación de bonos pensionales o cupones de bonos pensionales a cargo de la Nación, procedimiento que se efectuaba con base en las solicitudes realizadas por las administradoras, por lo que su vinculación resultaba inoficiosa al no estar facultada legalmente para pronunciarse respecto de la "eventual" nulidad de la vinculación de la demandante al RAIS, petición cimentada en engaños cuya acreditación le correspondía acreditar a la demandante, retorno al RPM que era imposible de declarar dado la aparente condición de pensionada por vejez en la modalidad de garantía de pensión mínima desde marzo de 2017. Que consultada la base de datos, la demandante tenía derecho a un bono pensional tipo A modalidad 2, liquidado provisionalmente en el año 2016 en respuesta a la petición ingresada por Colfondos, y cuya fecha de redención normal tuvo lugar el 10 de mayo de 2019, data en la que la señora Irma Dora alcanzó 60 años, empero, dado una variación en la historia laboral, procedió a anularlo el 23 de abril de 2019 con el fin de reliquidarlo, efectuando el correspondiente pago el 26 de mayo de esa anualidad, por lo que actualmente no tenía ningún trámite pendiente por resolver. Advierte que el 1 de febrero de 2017 Colfondos ingresó al sistema interactivo de la OBP solicitud de reconocimiento en favor de la afiliada de garantía de pensión mínima temporal, sin que a la fecha se hubiese tramitado la definitiva. Que en tal sentido NO se podía desconocer la calidad de pensionada de la demandante, tornándose inaplicable el precedente sentado. Solicita que de prosperar la súplica impetrada se revoque la prestación otorgada y se reintegren los dineros pagados debidamente indexados.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín declaró no sólo la ineficacia de la afiliación al RAIS, sino además que la demandante había permanecido en el régimen de prima media sin solución de continuidad. Condenó a Colfondos S.A. a trasladar a Colpensiones todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación,

como cotizaciones completas, bonos pensionales, aportes voluntarios del artículo 62 de la Ley 100 de 1993, con todos sus frutos e intereses, es decir, con los rendimientos que se hubieren causado, *con excepción de los dineros descontados por concepto de administración de las cuentas de ahorro individual.*

Condenó a Colpensiones reconocer y pagar la PENSION DE VEJEZ a la demandante a partir del retiro del sistema general de pensiones, liquidación que le correspondería realizar a la entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley 797 de 2003 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta 13 mesadas anuales. De otro lado, ABSOLVIÓ a dicha entidad del otorgamiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 e indexación.

Condenó a Colfondos S.A devolver a la OBP el valor del bono pensional de la demandante, debidamente indexado.

Absolvió a la señora IRMA DORA ECHAVARRIA CANO de las pretensiones incoadas en su contra por la AFP Colfondos en la demanda de reconvención. También absolvió a la AFP Colfondos de pagar la indemnización de perjuicios a favor de la accionante.

Finalmente condenó en costas a Porvenir S.A. fijando como agencias en derecho la suma 2 ½ SMLMV a favor de la demandante.

Dentro del término concedido por la ley, las partes, exceptuado el ente ministerial, interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, así mismo, aclaró que, aunque a la actora se le había reconocido garantía de pensión mínima, la ineficacia era aplicable, toda vez que dicha prestación no fue reclamada. Fue así como se sujetó a las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral, excepto en lo atinente a los montos a retornar, al excluir los costos de administración.

Respecto a la pensión de vejez, y teniendo en cuenta lo normado en la Ley 797 de 2003, encontró oportuno ordenar su reconocimiento, toda vez que la demandante había cumplido 57 años para una

data en la que contaba con más de las 1.300 semanas. Empero, el disfrute lo ató a la desafiliación del sistema, hecho que aún no se había evidenciado, incluso actualmente laboraba en el Liceo Salazar y Herrera.

Consideró improcedente la indemnización de perjuicios deprecada, entre otros argumentos, al señalar que el pago de los honorarios de los abogados se resarcía con la condena en costas, no con una indemnización en contra de los demandados.

2.2. RECURSOS DE APELACIÓN

2.2.1. DEMANDANTE

Centró su inconformidad en lo atinente a los perjuicios deprecados, reflejados en la pérdida del retroactivo a cargo de las administradoras del RAIS.

Manifestó que el a quo omitió lo indicado en el numeral décimo del escrito de la demanda, donde se relata que, además del perjuicio ocasionado con la adquisición de los servicios de un apoderado judicial, se ha sumado la mora en el pago de las mesadas pensionales, la cuales han tardado por consecuencia de las dificultades ocasionadas en la falta de información de las AFP privadas y que conllevaron a la pérdida del retroactivo pensional que tenía derecho la demandante, ya que la causación de su derecho en el RPM data del 10 de mayo de 2016.

Señaló que se debe abordar las instituciones del derecho, especialmente lo referido con la responsabilidad; que en nuestro ordenamiento jurídico desde un principio del derecho romano “aquella parte que genere un daño debe resarcirlo”. Que existe un precedente del Tribunal Superior de Medellín, en sala compuesta por los Magistrados Guillermo Cardona, Clara Inés López y Marino Cárdenas Estrada, de 2016, en proceso con radicado 05001310501520150044901, con elementos fácticos similares, evento donde se condenó a COLFONDOS a reconocer, a título de perjuicios, el retroactivo pensional que dejó de percibir la demandante como consecuencia del traslado de las administradoras. Al respecto, señaló que no se puede premiar a las administradoras privadas de pensiones con unos rendimientos por la administración de los recursos de los afiliados y de la seguridad social y que luego de una decisión judicial como la declaratoria de ineficacia por no cumplir con los elementos legales exigidos, tengan solo como consecuencia, realizar el traslado de los aportes, entrando en sus arcas los rendimientos y generando dividendos por medio de la administración de los fondos pensionales.

Resaltó que no resiste ningún análisis constitucional, ni legal, que aquella parte que ocasionó el perjuicio e indujo en error a una persona con falta de información (pues tampoco se corroboró dentro del proceso que COLFONDOS suministró una suficiente y verdadera información de dichas consecuencias) se niegue a resarcir un perjuicio, materializado en el retroactivo que dejó de percibir la demandante entre el 10 de mayo de 2016 y el momento en que Colpensiones reconozca dicha prestación.

Igualmente solicitó que se aplique lo que jurisprudencialmente se ha conocido como el retiro tácito e implícito, con la reclamación administrativa presentada previa interposición de la demanda, en la cual ya le había solicitado a la administradora de pensiones el reconocimiento de la pensión de vejez y por tanto, el hecho de que la señora se encuentre vinculada y realizando cotizaciones se debe a las circunstancias en que la pusieron las AFP privadas de seguir trabajando en la Institución Salazar y Herrera, ya que su futuro pensional con las AFP privadas no tenían ningún tipo de claridad, siendo esta la razón por la que debía pagarse el retroactivo pensional, atendiendo la figura del retiro tácito desde el momento de la radicación de la reclamación administrativa.

2.2.2. RECURSO DE APELACIÓN DE PORVENIR S.A.

Adujo que la demandante no solo suscribió el formulario de vinculación al RAIS a través de PORVENIR S.A. cumpliendo los lineamientos fijados en la ley para dicho momento, sino que también reiteró su voluntad de permanencia en dicho régimen al permanecer un tiempo considerable en el RAIS, en el cual aún podía optar por cambiarse al régimen de prima media con prestación definida al no estar afectada para dicho momento por la restricción contenida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, lo cual permite inferir que estaba conforme con los beneficios que venía disfrutando desde la fecha de la afiliación, que la demandante decidió permanecer en estos fondos privados, con el derrotero probatorio que permite concluir que la actora contaba con la información de las características del RAIS, presupuesto indispensable para tomar una decisión basada de las condiciones y beneficios que le reportaría desde sus traslado, que de no ser así, ni siquiera hubiese permanecido por tantos años en la AFP hoy demandada.

Frente a la ratificación de la voluntad de permanencia, reconoció que si bien la Corte Suprema de Justicia adujo en sentencia SL1688 de 2019 que la oportunidad de la información era indispensable, y por ello, debía ser previa al traslado, advirtió que tampoco se podía desconocer los actos posteriores realizados por la afiliada a través de los cuales se revelaba su real conocimiento de las características del RAIS, el uso de todos sus servicios y beneficios, actos posteriores que ninguna manera implican el saneamiento de la información sino que precisamente explicitan la existencia de

prueba indiciaria, que permite demostrar que la información fue dada de manera oportuna, transparente y completa desde el momento de la afiliación. Agregó que la asesoría brindada a la actora por la AFP en el momento de la escogencia del RAIS, se circunscribía a informar a los afiliados las características, condiciones y ventajas del RAIS, además de su solidez financiera, conforme al artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y sus posteriores modificaciones, última información que la demandante repetidamente aceptó en el interrogatorio de parte, sin que dicha información pueda analizarse desde la óptica de un buen o mal consejo, en primer lugar porque tal obligación solo apareció con la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, y en segundo lugar, ello indicaría usurpar la voluntad de los afiliados, únicas personas que después de conocer las características del régimen podrían sopesar si la escogencia del RAIS resulta adecuado para el favorecimiento de su vida pensional.

Sobre la condena en costas, se opuso a que absolviera a Colpensiones y Colfondos, señalando que el artículo 365 del C.G.P. disponía que esta condena no se da por que una de las partes incurrió o no en dolo en las actuaciones que originan la demanda, sino que se imponen por ser vencidas en el juicio. En tal sentido, las condenas impuestas a Porvenir debían ser asumidas por los tres fondos.

2.2.3. RECURSO DE APELACIÓN DE COLFONDOS S.A.

Resaltó que la demandante tiene estatus de pensionada y contrario a lo mencionado por el a quo, a pesar de no haber recibido a la fecha una mesada pensional, lo cierto es que realizó varias acciones que evidenciaban su voluntad de permanencia de afiliación al régimen de ahorro individual, ya que solicitó la garantía de pension mínima, autorizó el estudio, emisión y redención de bono pensional por parte del Ministerio de Hacienda, el cual se encontraba consignado en la cuenta, negocios jurídicos que se originaron por causa de la solicitud de la actora, y que cae por su propio peso el argumento de no haber recibido la mesada pensional por no haber estado conforme con el monto, ya que considera que la demandante tenía pleno conocimiento que la garantía de pension ofrecía exactamente eso, un salario mínimo, que si no estaba conforme con ello, no debió hacer esta solicitud en el año 2017 y debió haber interpuesto la acción de nulidad de ineficacia del traslado, sin embargo no fue así, y surgieron estos negocios jurídicos que fueron válidos y que se configuraron, tanto así que en oficio del 3 de marzo del 2017 se le comunicó a la señora demandante que tenía el estatus de pensionada.

Respecto de la calidad de afiliados y pensionados, la Corte Constitucional al determinar la exequibilidad del artículo 107 de la Ley 100 de 1993, arguyó lo siguiente:

“la Constitución atribuyó al legislador la función de configurar el sistema de pensiones, y le otorgó un margen amplio para hacerlo, a fin de garantizar que el sistema cuente con los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, y su prestación se haga de conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad.

Añadió que se debía tener en cuenta esos principios, pues hizo de buena fe todos los trámites pertinentes para que la demandante tuviera acceso a la garantía de pensión mínima. Que de igual manera, la Corte encontró que el medio elegido por el legislador resultaba idóneo para el logro de los fines perseguidos, pues permitir el traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, una vez haya adquirido la calidad de pensionado, podía poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros y desestimular la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de inversiones de mediano y largo plazo, dado que las posibilidades de traslado quedaría sujeta al capricho del pensionado, máxime que en las resultas del proceso se estaba ordenando a esa entidad devolver el bono pensional e indexarlo, desconociendo que la redención del bono pensional se hizo por solicitud de la demandante y no de Colfondos, por lo que no tiene sentido que se le impute alguna obligación, tomando como fundamento la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2018 dentro del radicado 22-2016-01001 con ponencia de la Magistrada Martha Ávila Triana, según la cual:

“...en el caso en particular de declarar la nulidad del traslado del RAIS del régimen de ahorro individual pues con posterioridad al formulario de afiliación que firmó la demandante de trasladarse de régimen se evidencia una serie de actuaciones por parte de la demandante con las cuales ratificó su intención de pertenecer al régimen de ahorro individual tal como lo dijo la apoderada de la AFP PORVENIR en su recurso frente a los cuales señaló que existiera algún vicio de consentimiento”

Trae a colación la sentencia de radicado 00873 proferida el 18 de septiembre de 2018, que constituyó el comienzo del precedente horizontal de la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal del Distrito de Medellín con ponencia del magistrado Hugo Alexander Bedoya, donde realizó una distinción entre el momento de la afiliación y aquel que empieza a disfrutar de la pensión, recordando la razonabilidad del enfoque en los casos en que nos ocupan retrotrayéndonos al estudio de la improcedencia que se declara la inexistencia del traslado, reiterando lo manifestado en la sentencia SL 17595 de 2017 cuyo Magistrado ponente es el Doctor Fernando Castillo Cadena, en donde en forma concreta mencionó lo siguiente

“... Así, en el asunto bajo escrutinio, brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre regímenes, entre los cuales se destaca: (i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional;

Sobre lo anterior señaló que si la información exigida antes de la afiliación y hasta el disfrute de la pensión, implica que una vez reconocida la pensión de vejez, esa falta de información se entiende superada con la celebración de un nuevo acto jurídico adelantado por la afiliada.

Reiteró que sostener las tesis de ineficacia de afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones insostenibles, por cuanto la consolidación de un nuevo estatus supone la participación de terceros de buena fe, como en este caso lo es el Ministerio de Hacienda a través de su oficina de bonos pensionales, por lo que era completamente improcedente declarar la ineficacia de la afiliación.

2.2.4. RECURSO DE APELACIÓN DE COLPENSIONES

Expuso que el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2013 estableció la distribución de los porcentajes de las cotizaciones de los afiliados del régimen de ahorro individual con solidaridad, que además un 3% del ingreso base de cotización sería destinado a financiar los gastos de administración de prima media de reaseguros de FOGAFIN y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes y en el artículo 39 del Decreto reglamentario 656 de 1994 define la cuota de administración como las que: “constituyen ingresos de la sociedad que administren fondos de pensiones de administración a que tienen derecho” determinando así la continuación de manera taxativa sobre cuales conceptos se podría cobrar las cuotas correspondientes. Resaltó que antes de la expedición de la Ley 797 de 2003, de conformidad con la Resolución 2549 de 1994, la cuota de administración a favor de las entidades era del 3.5%, y que parte del patrimonio autónomo de las AFP del régimen de ahorro individual y solidaridad se constituye con base de la administración que se cobra al afiliado al sistema general de pensiones.

Añadió sobre el literal f del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, que el hecho de que la cuota de administración que cobran las administradoras de régimen de ahorro individual con solidaridad, es un ingreso en favor de su patrimonio, en virtud de la afiliación realizada por el cotizante, se debe destacar que al ser declarada la ineficacia de esa afiliación, nula o por la omisión de las directrices dadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, estos dineros conjuntamente con sus rendimientos generan un enriquecimiento sin justa causa en favor del fondo privado y detrimento de Colpensiones, fundamentando lo anterior con las sentencias 76284 y 78667, cuya M.P. fue Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

2.3. ALEGATOS

2.3.1. PRESENTADOS POR COLFONDOS S.A.

Señala que la presente Sala de Decisión Laboral, en reiteradas providencias, ha señalado que las calidades de afiliado y pensionado, son diferentes; consideración con base en la cual ha definido, que NO es viable acceder a las pretensiones relacionadas con la solicitud de declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, para los eventos en los cuales, los demandantes ya tienen consolidado el estatus de pensionado, lo cual precisamente ocurre en el caso que nos ocupa.

Sobre la decisión de ordenar la devolución del bono pensional debidamente indexado, resaltó que el a quo en ese sentido desconoció que la indexación reconocida no tenía cabida frente a este rubro, porque el legislador ha dispuesto que los saldos depositados en las cuentas pensionales de los afiliados al RAIS mantienen su poder adquisitivo constante a través de los rendimientos financieros que generan los saldos depositados en dichas cuentas; por lo que el valor del bono pensional no sufrió detrimento alguno que deba ser subsanado con la indexación.

Que en el evento de confirmarse la sentencia de primera instancia, procedía lo ordenado en el numeral noveno de la parte resolutive del fallo, que declaró probada de oficio probada la excepción de inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración, teniendo en cuenta que los gastos de administración, se causan y descuentan por disposición legal, más no por capricho de las administradoras del RAIS y por ende son exigibles, vigentes y exequibles, agregando al respecto que:

Haciendo lectura del Decreto 2555 de 2010, contrario a como siempre se han concebido los gastos de administración, estos tienen una destinación específica en exactamente 11 gastos, de los cuales 1 es para garantizar la defensa judicial del fondo, otro es para la compra de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, por lo que la demandante ha estado amparada por los riesgos de invalidez y muerte con el pago de las primas de las pólizas previsionales y lo estará hasta la ejecutoria del fallo, pese a la declaratoria de ineficacia, entonces, el pago por la contratación de estas pólizas, cumplió su destinación específica. Los otros 9, son destinados únicamente para realizar las inversiones que realizan los fondos privados, que generan los rendimientos que son depositados diariamente en las cuentas de ahorro individual de los afiliados. De modo que dichos gastos, nunca hacen parte del P y G de los Fondos de Pensiones.

Adicionalmente, ese mismo Decreto, señala que el manejo de estos recursos es vigilado por la Superintendencia Financiera e incluso los Fondos de Pensiones de las utilidades que reciben como sociedad (es decir lo que si reportan dentro del P y G), deben crear reservas que garanticen la rentabilidad mínima mediante el mecanismo creado por esa norma y que periódicamente señala el Órgano de Control y si los fondos de pensiones, no garantizan la rentabilidad mínima, deben incluso sus socios responder con su propio patrimonio. Por lo que entonces, la norma y el Órgano de Vigilancia y Control, prevén mecanismos suficientes para que los fondos hagan un buen uso de esos gastos de administración.

Para el caso de Colfondos, mí representada es la mejor uso hace de los gastos de administración, ya que es la que mayor rentabilidad genera en el mercado, dado que rentabilidad mínima exigida es en promedio del 4.50% y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías siempre ha generado sobre el 8%, es decir el doble de la rentabilidad mínima exigida.

Que tampoco era posible ordenar la indexación de estos emolumentos, porque con los rendimientos generados por COLFONDOS fueron superiores a los que hubiera podido generar el ISS o Colpensiones si la actora nunca se hubiera trasladado de régimen, es decir, que quedó más que compensado este concepto, además NO fue objeto de petición, ni fue incluido en la fijación de litigio, trayendo a colación al respecto las sentencias del 24 de junio 2021, dentro del proceso de CLARA INÉS RODRÍGUEZ MUÑOZ con radicación 05001-31-05-015-2019-00531-01 con ponencia de la doctora María Eugenia Gómez Velásquez; sentencia del 4 de junio 2021, dentro del proceso de CRUZ MAGDALENA GUTIÉRREZ LOPERA, con radicación 05001-31-05-007-2018-00761-01 con ponencia de la doctora Martha Teresa Flórez Samudio; sentencia del 03 de junio 2021, con notificación por estados el 04 de junio 2021, dentro del proceso de MARÍA DEYSER GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, con radicación 05001 3105 001 2019 00264 01 con ponencia de la doctora Luz Amparo Gómez Aristizábal, entre otras.

Así mismo, indicó que la Corte Constitucional en sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, le impuso la obligación al I.S.S., hoy Colpensiones, de informarle al afiliado cuál era la diferencia en el valor de los aportes entre los dos regímenes sobre el saldo a trasladar y acordar con este un plazo prudencial para que el interesado asumiera la diferencia resultante, por lo que de presentarse la misma, será la parte demandante quien la asuma. En ese orden de ideas, tampoco podrá ordenarse en segunda instancia, que Colfondos asuma una eventual diferencia en el valor de los aportes. Nótese que en la demanda tampoco fue elevada pretensión alguna en ese sentido, por lo que no podría impartirse condena alguna en ese sentido, porque en segunda instancia no puede fallarse más allá de lo pedido, como antes se indicó.

Respecto del recurso de apelación elevado por la parte actora, solicitó que se confirme la decisión del a quo que absolvió a esa entidad de la pretensión de indemnización de perjuicios, desestimando dicho recurso, en la medida en que estas pretensiones quedaron totalmente en orfandad probatoria, porque ningún medio probatorio se allegó al plenario tendiente a demostrar los pretendidos perjuicios, los cuales NO se presumen y deben demostrarse. Además, los presuntos perjuicios, NO fueron determinados razonablemente en la demanda bajo juramento estimatorio, discriminando cada uno de los conceptos, de conformidad con la exigencia prevista en el artículo 206 del C.G.P., aplicable por analogía al procedimiento laboral según el artículo 145 del C.P.T y SS.

En igual sentido, solicitó que se desestimara el recurso de apelación elevado por la codemandada Porvenir sobre la absolución de Colfondos en cuanto a la condena de costas procesales, ello en razón a que esta última administradora no materializó el traslado de régimen de la actora y por lo tanto no puede considerarse como parte vencida del juicio, y que su participación en la litis obedece a que todas las entidades en las que estuvo vinculada la demandante comparezcan al proceso,

remitiéndose en este punto a varias sentencias del Tribunal, que han sostenido esta posición, las cuales reseña.

2.3.2. ALEGATOS COLPENSIONES

Que debía tenerse en cuenta la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 el cual modificó el literal E del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, a través del cual se estableció claramente que el afiliado no podría trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para adquirir su pensión de vejez, prohibición en la que se encontraba inmersa la demandante y por ende se imposibilitaba el traslado de régimen como aconteció en el presente asunto.

De otro lado señala que no se puede indicar que exista un vicio en consentimiento como lo indicó el juzgado de conocimiento, que conlleva a la invalidez del acto jurídico de afiliación al Régimen de Prima Media con prestación definida, teniendo en cuenta que la afiliación efectuada a PORVENIR S.A., se hizo en vigencia del Decreto 663 de 1993, por lo que sólo se exigía a las sociedades administradoras de pensiones y cesantías, atender el formulario con el lleno de los requisitos que para los efectos preveía la entonces Superintendencia Bancaria, a fin de demostrar la aceptación y consentimiento por parte de aquel. Que imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

Agrega que si bien el entendimiento entre el RPM y el RAIS sugiere que los afiliados sean debidamente asesorados dado que hay aspectos técnicos que los diferencian, lo cierto es que esta regla no podía interpretarse como una situación universal llamada a desplazar las situaciones de cada caso particular y que además invierta la carga de la prueba sin mayor análisis que la naturaleza experta que tiene la administradora de pensiones. Este contexto tampoco puede desconocer escenarios donde la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad de la demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, le permitía escoger acertadamente el régimen pensional. Este último aspecto ha sido por ejemplo evaluado por la Corte Suprema tratándose de afiliaciones tácitas donde prevalecen las actividades, cotizaciones y movimientos financieros a lo largo de la vida laboral.

Que en razón de lo anterior, se podía colegir sin lugar a equivoco que, en lo atinente a la carga de probar los supuestos de hecho narrados en el acápite fáctico del escrito de demanda, estos deben de estar a cargo de la demandante, pues la AFP cumplió con las atribuciones legales vigentes y

aplicables para el momento de la afiliación de la parte actora, y en razón a los principios rectores de equidad y solidaridad, NO podía imponérsele una carga adicional, más allá del formulario de afiliación, pues con ello se acentuaba el consentimiento y aceptación por el afiliado, sería una carga desproporcionada e imposible de cumplir. Es por ello, que no puede hablarse de un error por falta al deber profesional de información con el que cuentan las AFP, pues se considera grosso modo un modelo pensional que garantiza la pensión mínima, sus afiliados pueden pensionarse con años de anterioridad en el régimen de ahorro individual, los dineros depositados en las cuentas de ahorro individual pueden pertenecer a la masa sucesoral lo que no ocurre en el RPM que se trasladan es al fondo común en caso de ausencia de beneficiarios, etc.

Que no puede hablarse de un vicio en el consentimiento en los términos del artículo 1510 del Código Civil, el cual tampoco quedó demostrado en el presente asunto, pues si se analizaba de manera pormenorizado el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, con sus efectos legales de confesión, aquella indicó en su declaración que la firma del formulario de afiliación a PORVENIR y COLFONDOS fue de manera voluntaria y no hubo presiones por parte de un tercero ni por el asesor de los referidos fondos.

2.3.3. ALEGATOS PORVENIR S.A.

Tras realizar un recuento de lo acontecido en el proceso, indicó que debía revocarse en su integridad la sentencia proferida toda vez que el demandante no había acreditado un vicio en el consentimiento, ni ninguna de las causales previstas en el art. 1741 del CC, por lo que el acto de vinculación al RAIS fue eficaz, aunado a que el incumplimiento del art. 271 de la Ley 100 de 1993, bajo las intenciones que allí se mencionaban, únicamente implicaba la imposición de una multa por parte del Ministerio de Trabajo y en todo caso se estaban acogiendo presupuestos de diferentes codificaciones sin que resultara viable escindir compendios normativos. Tampoco era dable acudir a lo previsto en el art. 899 Código del Comercio.

Recuerda además que la afiliación reposa en un documento público que se presumía auténtico según los arts. 243 y 244 del CGP y el párrafo del art. 54A del CPT, y contenía la declaración estipulada en el artículo 114 de la Ley 100 de 1993, es decir, que la selección había sido libre, espontánea y sin presiones, sumado a que el referido documento no fue tachado, por lo que no se le debía restar valor probatorio.

Agrega que de presentarse alguna irregularidad, la misma estaría saneada conforme lo normado en los artículos 1742 y 1743 ibidem, por la ratificación tácita de la demandante, debido al tiempo de permanencia en el régimen privado, debiéndose privilegiar su inequívoca voluntad.

Destaca que garantizó el derecho de retracto, que la vinculación realizada fue de forma libre y voluntaria, brindándose una información oportuna y completa, que cumplió con la carga de la prueba en la medida que aportó los documentos que tenía su poder como el formulario de afiliación, que jurídicamente no es viable imponerle cargas a las previstas en las leyes existentes al momento del traslado, que el afiliado contaba con diferentes canales de comunicación, que debía realizarse un análisis conjunto y crítico de todas las pruebas, que el contrato era ley para las partes y debía producir consecuencias respecto de quienes lo celebraban.

Posteriormente recalca que no se podía confundir la ineficacia de un acto jurídico (acto que no produce efectos) con la nulidad absoluta, como de manera general se hacía, realizando algunas consideraciones en torno los aspectos característicos de cada figura.

Que de considerarse que el negocio jurídico celebrado entre las partes no tuvo validez, no podía olvidarse que el artículo 113, literal b) de la Ley 100 de 1993, mencionaba cuáles eran los dineros que debían trasladarse cuando existía el cambio de régimen, esto es “*el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos (...)*”, lo que impedía que legalmente pudiera ordenarse la devolución de sumas diferentes a las referidas en la norma, máxime si ningún otro valor estaba destinado a financiar la prestación, so pena de configurarse un enriquecimiento sin causa a favor de un tercero dentro del negocio jurídico celebrado entre el demandante y Porvenir S.A. como lo es COLPENSIONES; que ordenar el reintegro de los gastos de administración o las primas de seguros, es tanto como ordenarle a una compañía de seguros a que si no se presenta el siniestro amparado, devuelva el valor de la póliza.

Posteriormente aclara que:

Y es que, en virtud del artículo 1746, la regla general de la nulidad judicialmente pronunciada, es que da a las partes el derecho a ser restituidas las cosas “al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el negocio o contrato nulo, establece una serie de excepciones o pautas.

Si el negocio ha sido cumplido, total o parcialmente, por una de las partes o por ambas, la situación se retrotrae al estado en que las partes estarían de no haber celebrado el negocio. Es en esta circunstancia donde tienen cabida las restituciones de que trata el artículo 1746, que después de consagrar la regla general según la cual la nulidad judicialmente pronunciada da a las partes derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el negocio o contrato nulo, establece una serie de excepciones y pautas.

Entre las excepciones, se encuentra lo concerniente al objeto o causa ilícita, casos en los cuales no es posible repetir lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud (1525);

como tampoco lo que se haya dado o pagado al incapaz, salvo prueba de haberse hecho éste más rico (1747). Tampoco hay lugar a la restitución material del bien cuando ello no sea posible por motivos de utilidad pública o interés social, casos en los cuales se dará una reivindicación ficta o compensatoria (artículo 58 de la Constitución Política).

En cuanto a las pautas que da el segundo inciso del artículo 1746, está lo relativo a la posesión de buena o mala fe de las partes, tanto para las restituciones mutuas como para la conservación o devolución de frutos, intereses y mejoras, “según las reglas generales”, que son las que establece el artículo 961 y siguientes del Código Civil.

Aunque la distinción entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva pudiera tener alguna utilidad en un contexto extrajurídico, por ser una cuestión de definición, no puede negarse que al fin de cuentas todo hecho con relevancia jurídica que se origina en una acción humana voluntaria parte de la interioridad del sujeto y tiene que manifestarse en un signo externo interpretable a partir de criterios jurídicos, de otro modo no tendría relevancia para el derecho. De ahí que todo instituto jurídico en el que la buena fe juegue un papel preponderante, se concreta finalmente en una buena fe objetivada, es decir normativamente analizable.”

En consecuencia, no se debe ordenar la devolución de sumas diferentes a las indicadas en citado literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, por cuanto ningún otra valor está destinado a financiar la prestación del afiliado, por lo que condenar a pagar valores adicionales, configura un enriquecimiento sin causa a favor de un tercero dentro del negocio jurídico celebrado entre la parte demandante y Colfondos S.A. como lo es COLPENSIONES; pero además, determinar que se deben reintegrar los gastos de administración o las primas de seguros, es tanto como ordenarle a una compañía de seguros a que sino se presenta el siniestro amparado, devuelva el valor de la póliza.

Con relación estos gastos de administración, la Superintendencia Financiera de Colombia, en concepto con radicación No. 20191522169-003-000 del 17 de enero de 2020, indicó en forma expresa que en los eventos de proceder la nulidad o ineficacia del traslado, las únicas sumas a retornar son: los aportes y rendimientos de la cuenta individual del afiliado, sin que proceda la devolución de la Prima de Seguro Provisional en consideración a que la compañía aseguradora cumplió con el deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, ni tampoco la comisión de administración.

En este orden de ideas, los gastos de administración ni primas de seguros, al no corresponder a valores que pertenecen a los afiliados en ninguno de los regímenes pensionales en cuanto no financian la prestación de vejez y por ende no son parte integrante de ella, razón de peso para descartar su imprescriptibilidad, característica de que si goza el derecho pensional; luego, si están sujetos al fenómeno previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPT y SS, y así deberá declararse.

Finalmente destaca un razonamiento plasmado en un salvamento de voto según el cual se tenían que tener en cuenta las particularidades de cada asunto porque *“hacerlo de forma masiva, sin estudiar cada solicitud, se estaría creando un sistema legal que no fue establecido por el ordenamiento jurídico, en tanto el legislador garantizó la libertad de elección del régimen pensional en cabeza del afiliado de traslado, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva”*.

Por las anteriores consideraciones, solicita que se analice las circunstancias particulares pues aduce que no se acreditaron presupuestos establecidos en la ley para declarar la nulidad absoluta, como tampoco, la ineficacia del acto jurídico por el argumento jurisprudencial de la falta del consentimiento informado, aunado a que cumplió con la carga probatoria de acreditar que suministró la información suficiente y objetiva al momento de la vinculación como lo refleja el formulario de afiliación, el cual se reitera se trata de un documento público que se presume auténtico, además que no fue tachado ni desconocido en los términos previstos en la ley, sumado a lo expuesto por la parte actora, en

diferentes actos ejecutados por el demandante, pruebas que analizadas en conjunto y de manera crítica, sin duda exhiben el tan mentado consentimiento informado, más allá del momento mismo del traslado, inclusive.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Inicialmente se establecerá si la demandante ostenta o no el estatus de pensionada.

Luego se determinará si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la actora a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. En caso afirmativo se examinará qué haberes le corresponde retornar a las AFP privadas y si frente a éstas es procedente ordenarles el pago de los perjuicios deprecados, concretamente el retroactivo pensional desde el cumplimiento de los 57 años, o bien, si es dable dar aplicación a la teoría del retiro tácito para efectos de cuantificar el retroactivo aludido desde la fecha de reclamación de la prestación a Colpensiones.

También se estudiará la viabilidad de la condena en costas a cargo de Colfondos y Colpensiones.

No obstante, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

Es por ello que igualmente se analizará todo lo relacionado con el reconocimiento de la pensión de vejez.

Es de aclarar, que si bien Colfondos y Porvenir proponen multiplicidad de temas de análisis en los alegatos presentados, únicamente se examinarán aquellos que hayan sido mencionados en los recursos de alzada, siendo esta y no otra, la oportunidad propicia para ventilar su descontento con la decisión adoptada en primera instancia, sin que los alegatos comporte una etapa que le permita introducir nuevos temas a estudiar.

4. CONSIDERACIONES

ESTATUS DE LA DEMANDANTE

Conforme se aprecia a folios 26 y 209 del archivo 01 del expediente digital, el 3 de marzo de 2017 Colfondos le informó a la señora Irma Dora Echavarría Cano que había sido resuelta favorablemente la solicitud de pensión de vejez con garantía de pensión mínima. Citan la norma que regula la figura (art. 65 de la Ley 100 de 1993), advirtiéndole que el pago se haría inicialmente con cargo a los recursos de la cuenta de ahorro individual hasta tanto se redimiera el bono pensional, de acuerdo a lo previsto en el art. 3 del Decreto 142 de 2006, que la mesada sería equivalente a \$737.717 y que no había lugar al pago de retroactivo al evidenciar que la reclamante continuaba con el vínculo laboral activo.

No obstante, lo relevante de dicha misiva es lo que a continuación se expresa, dado que indicaron a la peticionaria que para hacer efectivo el pago de la mesada debía allegar determinada documentación, así:

- Certificación de cuenta expedida por la entidad financiera en la que se han de realizar los pagos de la mesada pensional con el número de cuenta y el nombre del titular de la misma. Por lo anterior, lo invitamos a que realice la apertura de su cuenta en el Banco de Bogotá, entidad que ofrece sus servicios a nuestros futuros pensionados y con quien Colfondos S.A. tiene registrada la cuenta dispensora (ahorros 009-35477-0) y el código de convenio (55G).
- Afiliación radicada en la EPS que deseen en donde figuren usted en calidad afiliado cotizante. Si está cotizando para salud deberán afiliarse como pensionados de la misma entidad. El formulario se diligenciará con los siguientes datos: NIT, 900391901-2 y razón social "Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado".

- Certificados de supervivencia. Colfondos S.A., realizará el control de supervivencia a través de las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el sistema de información del Ministerio de Salud y Protección Social y con los que define el Gobierno Nacional. En caso de que el Ministerio reporte el fallecimiento de un afiliado o beneficiario de la prestación, el pago de la mesada pensional se suspenderá.

Vale la pena mencionar que para los connacionales que se encuentren fuera del país deberán acreditar su supervivencia ante las entidades que forman parte del Sistema General de Seguridad Integral cada 6 meses, ante el Consulado de la circunscripción donde se encuentre o ante la autoridad pública del país donde residan.

- En el evento en que usted tenga vinculación laboral activa, deberá allegar comunicado del empleador en la cual indique si usted se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios, en caso contrario en dicho comunicado se debe indicar el valor a descontar del monto retroactivo, a favor del empleador.
- Suscripción del contrato de retiro programado

La documentación antes enunciada deberá ser entregada antes del día 15 del mes, para que su primera mesada pensional pueda ser pagada en el mes subsiguiente. Cabe señalar que sin esta información no se dará inicio al pago de las mesadas pensionales.

Destáquese el apartado final de la comunicación en comento, según la cual, NO se daría inicio al pago hasta que dicha documentación fuese entregada.

Y ello resulta relevante pues guarda coincidencia con lo manifestado por la demandante en el interrogatorio de parte absuelto, pues al ser indagada sobre su estatus de pensionada en el RAIS manifestó que efectivamente Colfondos, en marzo de 2017, le reconoció pensión bajo la modalidad de garantía de pensión mínima, y aclara que en ningún momento realizó la *reclamación* de esta prestación y mucho menos diligenció el formulario de solicitud de pensión ante Colfondos, sin embargo, reconoció que con su puño y letra autorizó la emisión y redención del bono tipo A que se encuentra en la cuenta de ahorro individual.

Entiéndase la palabra *reclamación* NO como la petición que se eleva, sino como el retiro efectivo del dinero.

La veracidad de tal afirmación también encuentra respaldo en el recurso de alzada formulado por Colfondos, cuando reitera que el estatus de pensionada de la demandante NO deviene de la existencia o no de la consignación efectiva de la mesada, sino del reconocimiento de la prestación. Frente al tema la OBP refleja su incertidumbre al señalar que si bien autorizó el pago de la garantía de pensión mínima en aquella época, por expresa solicitud de la AFP, lo cierto es que la otorgó de manera transitoria (mientras se redimía el bono), precisando que a la fecha, pese al pago del bono, aún no se había tramitado lo referente al pago con carácter definitivo de dicha garantía.

Así las cosas, la pregunta que cabe hacernos es ¿con el reconocimiento se adquiere el estatus de pensionada pese a la inexistencia del ingreso a nómina? Y la respuesta a dicho interrogante la encontramos en los razonamientos plasmados por la Sala de Casación Laboral mediante sentencia de radicación SL1309-2021, M.P. GERARDO BOTERO ZULUAGA, que un caso de contornos similares a este, consideró que:

Pues bien, conforme a las controversias planteadas, es menester analizar si el señor Luis Carlos Gaviria Echavarría tiene el status de pensionado o si continúa ostentando la calidad de afiliado, y si ello tiene incidencia para efectos de su retorno al régimen de prima media que administra Colpensiones, conservando los beneficios del régimen de transición.

(...) En el asunto bajo examen se tiene, que el señor Gaviria solicitó a Protección el reconocimiento de la pensión como se infiere del hecho séptimo del escrito inaugural (f. 3), a lo cual se le dio respuesta por parte de esa administradora de pensiones de manera favorable, mediante escrito del 16 de marzo de 2012 (fs. 28 a 31 y 83 a 85); sin embargo, se advierte que el actor no estuvo de acuerdo con el valor de la mesada, es decir, no aceptó la liquidación efectuada por la AFP y mucho menos se acredita que haya expresamente escogido o seleccionado una modalidad pensional, pues aun cuando ello se afirma por parte de la mencionada entidad de seguridad social en su respuesta (f. 28 y 83), dicho documento no aparece suscrito por el demandante en señal de aceptación, ni tampoco se allegó prueba alguna que así lo acreditara.

No puede perderse de vista que el artículo 2 del Decreto 1889/94, compilado por el canon 2.2.6.1.1. del Decreto Único Reglamentario 1833/16, establece que las pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia en el régimen de ahorro individual con solidaridad «*podrán revestir cualquiera de las modalidades contempladas en el artículo 79 de la Ley 100 de 1993, a opción del afiliado o sus beneficiarios, según el caso*», de donde se infiere que

para adquirir el status de pensionado al que hace referencia el precepto 64 de la Ley 100/93, debe el afiliado seleccionar la modalidad pensional, aspecto que hace parte de los trámites previos para el otorgamiento de la pensión; es decir, que esta se materializa con la escogencia de determinada modalidad, y por lo mismo no se puede desligar.

En este orden, aun cuando la AFP Protección S.A. mediante comunicado del 16 de marzo de 2012, aludió al otorgamiento de la pensión de vejez, a partir del 1 de febrero de 2012, en un monto inicial de \$1.873.682, al no estar demostrado plenamente en el informativo que el señor Gaviria Echavarría hubiese escogido previamente una modalidad pensional de las previstas en el artículo 79 de la Ley 100/93, no puede considerarse que ostente la calidad de pensionado, pues claramente se advierte de dicha misiva, que para aquella data se estaban adelantando los trámites para conceder dicha prestación y que este alcanzara ese status.

Con todo, aun si se aceptara en gracia de discusión que el asegurado seleccionó el modelo de retiro programado, lo que se insiste, no está plenamente demostrado en el informativo, debe precisarse que esa escogencia tampoco conduce a sostener ni entender que se materializó por cuanto el afiliado no suscribió el contrato de retiro programado, trámite que necesariamente debía efectuarse de manera previa para poder considerar la aceptación del demandante de tal modalidad pensional, en tanto que es en ese documento contractual donde se dan a conocer y se acuerdan las cláusulas que regirán aquella modalidad de pensión, como lo son los beneficios ofrecidos, los riesgos asumidos por el asegurado, las obligaciones de las partes, etc.

En esa medida, la inexistencia u omisión de **haberse surtido o llevado a cabo dicho trámite preparatorio para obtener la prestación deprecada, conduce igualmente a sostener que el demandante no había adquirido la calidad de pensionado; es decir, este no tiene una situación jurídica consolidada, plenamente definida ni consumada que tuviese que retrotraerse (CSJ SL373-2021), de tal suerte que su status sin lugar a dudas sigue siendo el de un simple afiliado al sistema pensional.**

(Resaltos de la Sala).

Mutatis mutandi habría de arribarse a la misma conclusión en el caso objeto de estudio, pues NO se culminaron los trámites necesarios para efectivizar el pago de la prestación por vejez. Eventualmente podría variar el pensamiento de la Sala si tras el otorgamiento de la pensión se efectúa el pago de la mesada, resistiéndose el adquiriente de retirar el dinero de la entidad bancaria. Pero NO es ello lo que aquí sucede. Lo que realmente se aprecia es el total desconocimiento de la peticionaria, quien pese a diligenciar lo pertinente para obtener la garantía de pensión mínima, se sorprende con el monto de la misma, cuando legalmente, como su nombre lo expresa, es equivalente al salario mínimo. En todo caso, al margen de ello, unos trámites iniciales, NO culminados, impiden que la demandante ostente el estatus de pensionada, lo que consecuentemente habilita el examen de la solicitud de ineficacia del traslado bajo la óptica de un afiliado.

INEFICACIA

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como

consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna*. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1. ° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3. °, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3. ° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente el 28 de febrero de 2001 cuando suscribió el formulario de vinculación a PORVENIR S.A (fl 66 del archivo 01 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración.

Y es que expresamente la señora IRMA DORA ECHAVARRIA CANO en el aludido interrogatorio expuso que es secretaria en el Liceo Salazar y Herrera desde el año 1998, hasta la actualidad, que incluso cotiza porque *no ha hecho ninguna reclamación de pensión*. Que lleva cotizando como 25 años, y al Seguro como desde 1978 a 1988, 10 años, tuvo un receso ante el nacimiento de sus hijas y luego empezó nuevamente de 1998 al 2001, de ahí se trasladó a Porvenir, luego en el 2006 a Colfondos. Adujo que para aquella época del traslado estaba el rumor de que el ISS se iba a terminar y por lo tanto podría perder su pension, ante esta situación, las directivas permitieron que los fondos ingresaran a la institución, entraban indistintamente, NO todos de una vez, y se vinculó con Porvenir S.A. tras haber asistido a una charla corta en el auditorio de su lugar de trabajo, donde solo le explicaron que así no perderían la pensión, que este fondo sería similar al ISS, que estaban asociados con entidades con mucha estabilidad y por ende su dinero no se perdería. Resaltó que en ningún momento le hablaron de que sucedería con los aportes realizados en el RPM o alguna información adicional, que no diligenció, ni leyó el formulario de afiliación, ya que confió en lo que le dijo ese promotor, sólo dio los datos. Que no fue presionada a firmar. Que hoy quiere retornar

porque en el momento en que ingresó los papeles en el 2017 y vio que la liquidaron con un salario mínimo, se puso muy triste porque sus ingresos son superiores y era cabeza de hogar, agrega que *consulté con los abogados y NO reclamé la pensión que me asignaron, y opté por hacer esta demanda.*

Sobre la MOVILIDAD indicó que para el año 2002 contaba con 47 años cumplidos, que realizó ese traslado horizontal a Colfondos ya que en esta AFP le ofrecieron más rentabilidad y que en todo caso era un fondo más sólido.

Destáquese que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, aunque lo indicado por la demandante pudiese dejar entrever cierta información suministrada al momento suscribir el formulario de vinculación al RAIS, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc.) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Bajo este contexto, de acuerdo a los razonamientos que preceden, NO es dable acoger la postura de Colpensiones, pues aunque ciertamente la demandante sobrepasa los 47 años para efectos de solicitar su retorno a prima media, lo que aquí se examina es un asunto totalmente disímil, en donde ante la no acreditación del cumplimiento del deber de información, se declara ineficaz el traslado, y como nunca existió se acude a una especie de ficción legal entendiéndose que la persona permaneció en el régimen anterior sin solución de continuidad, en los términos del literal b) del art. 13 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 271 de ese mismo estatuto.

De otro lado, tampoco interesa a la Sala los parámetros advertidos por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-062 de 2010, según la cual, al igual que en la SU-130 de 2013, sólo un cúmulo de personas tenía la posibilidad de retornar a prima media en cualquier tiempo al ser beneficiarios del régimen de transición pero en virtud de la densidad. No obstante, aunque ello es cierto, nada tiene que ver ese razonamiento con el tema que hoy nos convoca, donde con apoyo a lo dispuesto en el art. 271 de la Ley 100 de 1993, el asegurado busca obtener la consecuencia jurídica que allí se dispone, cuando, como en este caso, no se acredita el cumplimiento del deber de información para el momento en que se trasladó al RAIS, tornándose ineficaz dicho acto.

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso de la señora IRMA DORA ECHAVARRIA CANO, quien en 2001 se vinculó a Porvenir, y luego se trasladó a la AFP Colfondos el 16 de diciembre de 2005 conforme se aprecia en el formulario de afiliación (fl. 50 del archivo 01 del expediente digital). Lo anterior por cuanto, de un lado, importa examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el

primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo, lo que a voces de la demandante, fue precisamente lo que sucedió.

En todo caso, si las AFP incumplieron su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una MOVILIDAD entre administradoras del RAIS, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

DINEROS A RETORNAR

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a la administradora del RAIS accionada, a trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **MODIFICARÁ** la decisión adoptada por el a quo, quien tras exponer sus razones, ordenó a Colfondos S.A. devolver todo el dinero de la cuenta de ahorro individual, entiéndase cotizaciones y rendimientos, pero excluyendo las cuotas de administración, cuyo retorno se ordenará en esta providencia, y así se dirá en la parte resolutive del fallo, devolución que también debe abarcar los tres ítems referenciados sobre el tiempo en que la afiliada permaneció en Porvenir S.A., pues de lo contrario, la devolución ordenada sería deficitaria. Lo anterior en acatamiento al claro precedente sentado por nuestro órgano de cierre.

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es Colfondos S.A., ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció en Porvenir S.A.

La Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la INDEXACIÓN de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente ADICIONAR el fallo toda vez que los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, serán entregados a Colpensiones debidamente indexados por parte de Porvenir, y Colfondos respecto de los aportes que ha cada una le corresponda retornar por el tiempo de permanecía en cada fondo. El índice inicial será el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y el índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Frente al punto ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

En este orden de ideas, conforme el análisis que precede, y pese a los argumentos que en este punto ventila Porvenir S.A. en los alegatos presentados ante esta instancia, no es dable acoger su postura, ni aun teniendo en cuenta el concepto que cita de la Superintendencia Financiera de Colombia, toda vez que el mismo no resulta vinculante, efecto que se extiende respecto del salvamento de voto que invoca para cimentar su descontento en este punto.

Para finalizar lo que en esta materia concierne, resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, todas las administradoras del RAIS accionadas deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que también se adicionará el fallo.

PENSION VEJEZ

Respecto a su causación bastará con decir que al entenderse que la afiliada permaneció sin solución de continuidad en el régimen de prima media, le es dable acceder a dicha prestación de acuerdo a los lineamientos previstos en la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, sin que ninguna discusión gravite en cuanto a que la señora Irma Dora Echavarría Cano cumplió 57 años el 10 de mayo de 2016, dado que nació el mismo día y mes del año 1959 conforme se aprecia no sólo en su cédula de ciudadanía (fl.23) sino además en el certificado de Registro Civil de Nacimiento (fl.24), habiendo alcanzado a cotizar al régimen pensional más de las 1.300 semanas exigidas, concretamente un total de **1.564** a octubre de 2018, fecha del último reporte expedido por Colfondos S.A. (fl. 214-216), entidad a la que cotizó **655.65** semanas, a las que se deben sumar las **411.36** aportadas con Porvenir (fl. 44-46) y las **497.71** realizadas cuando estuvo afiliado en el otrora ISS entre el 3 de agosto de 1979 y el 14 de febrero de 1989 (fl.55-59).

Así las cosas, es dable concluir que la prestación por vejez se causó cuando la demandante cumplió 57 años.

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS y retroactivo pensional

He aquí el tema en el que se cimenta el descontento del apoderado de la parte actora en el recurso de alzada, dado que a su juicio, debe concederse el retroactivo pensional que estima causado desde el día 10 de mayo de 2016 cuando la demandante cumplió 57 años, día a partir del cual, a voces de aquel, debió haber percibido la prestación en caso de no haber sufrido el engaño, y cuantificado hasta la fecha en que se acredite el ingreso en nómina por parte de Colpensiones; o subsidiariamente se aplique la teoría de inducción en error y se conceda el retroactivo a partir de la reclamación elevada a la administradora del régimen de prima media. En ambos casos, considera que el aludido retroactivo debe estar a cargo de las administradoras del RAIS accionadas a título de resarcimiento de perjuicios, conforme las súplicas impetradas en el libelo genitor.

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

Recuérdese en este punto que el a quo declaró el derecho pero sometió el disfrute al día en que se acreditase el cese de cotizaciones o la novedad de retiro, pues en el interrogatorio de parte absuelto por la accionante el día en que se profirió la sentencia (12-11-2020), aquella aceptó que aún se encontraba trabajando, ejecutando la misma labor de años atrás, aspecto en el que la parte actora recalca que no era dable para la demandante cesar sus actividad laboral cuando arribó a la edad pensional por cuanto no disfrutaría de una vida en condiciones dignas con el salario mínimo que le ofrecía el fondo privado.

En virtud del engaño que predica solicita se resarza el perjuicio y se condene a Colfondos y Porvenir a pagar el retroactivo a título de indemnización, especificando que en ello consiste el daño.

Recordemos que de conformidad con el artículo 13 del Decreto 758 de 1990, aplicable por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, el disfrute se da cuando una vez causada la prestación se solicita a la entidad administradora de pensiones el reconocimiento de la misma y se ha dado el retiro expreso o desafiliación tácita del sistema general de pensiones, pues para la liquidación de la pensión se debe tener en cuenta hasta la última semana cotizada pues mal se podría reconocer un retroactivo sobre unas semanas que efectivamente sirvieron de base para el cálculo de la prestación.

Bajo éste panorama, inicialmente tendríamos que la última cotización al sistema sería la determinante para establecer la fecha de disfrute. Para ello, nos remitimos a la información de la Historia Laboral que obra a folios 214 y ss, en la cual se aprecian aportes hasta octubre de 2018, precisamente porque fue expedida en data cercana a tal fecha (29/11/18), de ahí que ningún otro pago podría visualizarse. Aunado a ello, tal y como se dijo, el a quo dio crédito a la afirmación de la actora cuando al absolver interrogatorio de parte, adujo que aún se encontraba laborando y cotizando.

Así las cosas, encuentra la Sala que, aunque las pretensiones se encaminan a lograr el reconocimiento de la pensión de vejez desde la causación, realmente las cotizaciones efectuadas con posterioridad NO son producto de la inducción en error, la señora Irma Dora bien podía dejar de realizar aportes al régimen pensional, pero NO lo hizo, y consecuentemente es inexistente el daño. Veamos porqué:

Conocedora es la Sala, de la tesis según la cual nuestro órgano de cierre ha reconocido el derecho a disfrutar de la pensión desde el momento en que se causa la misma pese a que con posterioridad el afiliado haya continuado realizando aportes al régimen pensional, pero únicamente cuando se demuestra que dichas cotizaciones lo fueron por la errada información suministrada por parte de la

entidad administradora. Entre dichos pronunciamientos encontramos las sentencias 37.798, 39.206 y 63.823 de 2018, además de las de radicación 34.514, 39.391 y 42.289.

En el último de los antecedentes jurisprudenciales citados, nuestro órgano de cierre señaló que.

“la ley de seguridad social establece como necesaria la desafiliación del sistema para que proceda el pago de la pensión de vejez, y así mismo recordó que se debe estudiar las particularidades de cada caso, pues su aplicación ha de ajustarse a las especiales circunstancias que emergen de la situación pensional del afiliado, además que no es posible hacer responsable al asegurado de los errores de la administradora de pensiones, quien como en esta oportunidad acontece debió reconocer el derecho en su oportunidad, por estar ya satisfechos la totalidad de los requisitos exigidos por los reglamentos del ISS.

En éste caso, lo expuesto en dichas providencias solo estaría llamado a materializarse a partir de la fecha de notificación de la Resolución a través de la cual se negase la prestación a la actora aduciendo que su densidad era insuficiente para acceder a una pensión de vejez, pues con antelación a ese día la persona habría realizado válidamente aportes al régimen pensional sin haber sido notificado de ninguna negativa.

Sin embargo, aunque el 3 de agosto de 2018 (fl. 68) la afiliada solicitó a Colpensiones la declaratoria de nulidad de su afiliación al RAIS y consecuentemente el pago de la pensión de vejez, lo cierto es que la entidad NO tenía la competencia para ello, salvo que su retorno al régimen de prima media lo fuera por tener 750 semanas al 1 de abril de 1994, pero sólo contaba con 497, de ahí que dicha administradora no contara con opción diferente a no acceder a lo pretendido, consecuentemente no le era dable ni siquiera examinar la procedencia de dicha pensión, mucho menos le indicó al asegurado que su densidad era insuficiente o que debía continuar cotizando.

Quiere ello decir que, contrario a lo afirmado por la parte actora, NO medió una actuación que la constriñera a continuar cotizando al sistema pensional, aspecto que es el que precisamente ha examinado la Corte en la teoría conocida como inducción en error, al castigar al fondo, por denominarlo de alguna manera, obligándolo a reconocer un retroactivo, cuando causado un derecho, obliga a la parte a continuar cotizando, constreñimiento para el caso inexistente.

Incluso, resulta extraño para la Sala, que ni siquiera la presentación de la demanda, radicada el 17 de agosto de 2018 según se aprecia en el Sistema de Gestión Judicial) motivara a la actora a dejar de efectuar dichos aportes al sistema, pues si lo pretendido era invocar una inducción en error para efectos de acceder judicialmente a un retroactivo, debió por lo menos abstenerse de efectuar tales pagos al incoar esta acción, para disfrutar de la pensión de vejez, pero por razones que desconoce esta Magistratura, lo que lógicamente debió acontecer, NO ocurrió.

El todo caso la accionante NO tenía un temor fundado de perder la pensión, sino que por el contrario, tenía una densidad más que suficiente para causarla. Bien pudo la actora cesar los aportes al régimen pensional si lo que quería era disfrutar de la prestación, pero ello NO ocurrió oportunamente, probablemente ni siquiera lo sabía, especialmente de cara a un régimen en el que ello no importaba, o bien podía continuar realizando cotizaciones con el fin de contribuir al mejoramiento de la mesada en consideración a los IBC que venía reportando o aumentar el capital de su cuenta de ahorro individual. También le era dable continuar laborando y reportar las novedades correspondientes al sistema, dado que la PILA permite que la persona, precisamente para no afectar el retroactivo, cese las cotizaciones al régimen pensional aunque perviva un vínculo, pagándose únicamente los aportes para cubrir otras contingencias, como salud y riesgos laborales.

Bajo este contexto NO puede el apoderado de la demandante culpar a las administradoras accionadas de la pérdida del retroactivo toda vez que pervivía para aquella la posibilidad de reportar la novedad P que significa que el cotizante se retira únicamente de un subsistema, el pensional.

En tal sentido, aunque pudiese presentarse una afectación a la calidad de vida de la accionante al recibir una prestación del RAIS que no le permitiese vivir en condiciones dignas por cuanto le ofrecían una mesada equivalente al salario mínimo legal, tal aspecto comporta un foco de distracción si tenemos en cuenta que lo que se esperaba de una conducta diligente no era retirarse de la institución educativa de carácter privado donde se desempeña como secretaria, sino del régimen pensional, continuar laborando pero sin realizar aportes al sistema general de pensiones, de ahí que NO sea tal palmario para esta Magistratura el hecho de que la pérdida del retroactivo deprecado se deba a acciones de terceros.

De ahí que no tenga operatividad, para el caso que nos ocupa, la tesis invocada para acceder a la prestación desde el cumplimiento de la edad y en consecuencia, el disfrute lo sea desde el día siguiente al último aporte efectuado al régimen pensional,

El análisis efectuado resulta determinante para abordar la indemnización de perjuicios pretendida.

Al respecto habrá de señalarse que, en parte alguna, se acreditó que la administradora del RAIS hubiese brindado una errada información a la actora al momento de afiliarse, siendo carga de quien aduce la existencia de un perjuicio, demostrar no sólo su existencia, sino que el mismo está ligado a tal actuar, es decir, ese nexo de causalidad, pues aunque podría asimilarse el daño a la ausencia del retroactivo, ello no releva a la demandante de la actividad probatoria que en tal sentido debió desplegar.

Y es que la ineficacia aquí declarada, no deviene de tal hecho, es decir, del actuar negligente de Porvenir, ni de que se hubiese configurado un error de hecho en la naturaleza del acto o en la identidad de la cosa como vicio en el consentimiento, sino por el contrario, tal ineficacia nace de la omisión de la AFP en cuanto a no cumplir la carga de la prueba que el precedente judicial a radicado en cabeza suya, de que el fondo no demostrara la calidad de la asesoría que en su momento brindó a la actora.

Así las cosas, si se desconoce los pormenores de la misma, no puede tildarse de indebida o irregular, por lo que el eventual perjuicio que se alega, no puede indefectiblemente desprenderse de tal asesoría en la que la accionante decidió trasladarse de régimen, y aunque el temor fue la principal razón que alegó en el interrogatorio de parte absuelto, aquel tiene como finalidad provocar una confesión, no acreditar un hecho; debió desplegar una actividad probatoria amplia que permitiese a la Sala encontrar acreditado el nexo de causalidad entre una conducta y el daño que se alega.

En todo caso se reitera que la demandante se encontraba facultada para cesar aportes tras el cumplimiento de la edad, y si no lo hizo no puede acarrearle a Colfondos o Porvenir los efectos de tal determinación.

Aunado a ello, aunque tal tesis no fuera de recibo, a igual conclusión se llegaría dado que NO es un constreñimiento lo que detonó la existencia de cotizaciones más allá de la fecha de disfrute, sino más bien el desconocimiento de la ley, ignorancia que NO se puede cimentar en la supuesta ausencia de una asesoría correcta, completa, clara y veraz por parte de la administradora del RAIS al momento del traslado toda vez que ese deber de buen consejo al que alude la jurisprudencia se enmarca en la ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. De esta manera, aun partiendo de que nada de ello se hubiese indicado en esa asesoría inicial, no implicaría inexorablemente la acreditación de un daño en cuanto a la pérdida del retroactivo, pues NO se espera que en dicha asesoría se haga un estudio exhaustivo, pormenorizado, detallado o puntual de cada régimen, se hablan de generalidades, ello teniendo en cuenta que es un tema complejo y amplio. En otras palabras, la ineficacia NO deviene del hecho de que PORVENIR no hubiese explicado a la demandante que la causación y disfrute son dos momentos disímiles en la pensión de vejez que se otorga en el régimen de prima media.

De avalar tal tesis, le bastaría a cualquier persona con decir que no sabía que para disfrutar de la pensión debía cesar los aportes al régimen pensional, endilgar la culpa de su ignorancia a la administradora, y acceder automáticamente a su pago, lo que obviamente escapa a la real

intelección del art. 13 del Decreto 758 de 1990, al margen que el desconocimiento de la ley no es excusa para incumplirla.

Por las razones expuestas, no encontrara eco en esta instancia tal pretensión, manteniéndose en este aspecto la decisión del a quo, quien acertadamente no encontró acreditado la existencia de un daño.

COSTAS

Pretende Porvenir la extensión de la condena en costas a prorrata entre las vencidas en juicio, es decir, Colpensiones y Colfondos.

Al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General de Proceso, inicialmente para la concesión de las costas se acudió a un criterio objetivo, dado que sólo se examinaba si había salido avante la totalidad o no de las pretensiones, sin atender la buena o mala fe de la entidad. Sin embargo, tal posición fue morigerando en casos en los que no había sido la conducta de la entidad la que originó el conflicto que hoy se pone en conocimiento de esta Sala, máxime cuando la postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento ha dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

De ahí que cualquier decisión de Colpensiones tendiente a negar administrativamente el traslado que judicialmente solicitó la accionante, no resulte caprichosa, sino que proviene de la prohibición consagrada en la Ley 797 de 2003 en torno a la imposibilidad de trasladarse entre régimen cuando un afiliado se encuentra a menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse.

Tal criterio se adoptó con ocasión de la expedición de la sentencia con radicado 44.454 del 2 de octubre de 2013, debate que se dio desde la óptica de la improcedencia de los intereses moratorios en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encontraran justificadas.

Mutatis mutandis, se ha aplicado dicho criterio PERO UNICAMENTE respecto de las costas procesales que se tasan en primera instancia a cargo de Colpensiones, no así respecto de las administradoras del RAIS, pues lo que en este aspecto se analiza no es precisamente la negativa de la respuesta a un derecho de petición, sino los efectos de una afiliación a otro régimen, es el actuar u omisión de la administradora del RAIS el que cimenta la necesidad de un afiliado de activar, como en este caso, el aparato judicial en aras de obtener la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico,

habiendo salido avante las pretensiones que en tal sentido se incoaron, razón que aunada a las que preceden permiten a esta Magistratura extender a COLFONDOS la condena en costas en primera instancia, pues pervive para la misma ese deber de información, cuyo cumplimiento no acreditó, aunado a que para el 16 de diciembre de 2005, día en que la señora Irma Dora suscribió dicho formulario de traslado horizontal a Colfondos S.A. (fl. 50 y 212), la afiliada contaba con 46 años, correspondiéndole NO sólo ilustrar, asesorar y acompañar a la afiliada durante todo el camino en el que forjaría su futuro pensional, sino además advertirle que aquella decisión implicaba que en razón de la edad ya NO podría retornar al régimen de prima media, lo que no ocurrió, o por lo menos ello no se demostró.

En tal sentido, se condenará en costas a Colfondos en primera instancia por haber salido vencida en juicio. Las mismas habrán de tasarse por el funcionario competente en la etapa procesal oportuna.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **modificándola y adicionándola** en los aspectos antes aludidos.

Sin costas en esta instancia dado que NO fueron acogidos los argumentos de disenso de la parte actora, de Porvenir S.A., ni Colfondos S.A. Únicamente tuvo éxito en el recurso Colpensiones.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **IRMA DORA ECHAVARRIA CANO** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.990.507 contra **COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A., MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y COLPENSIONES**.

SEGUNDO: se **MODIFICA** el numeral segundo del fallo bajo el entendido que COLFONDOS S.A. trasladará a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, incluyendo también los tres ítems que componen los gastos de administración, última


orden que también se extenderá a PORVENIR S.A. respecto de los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima que recibió durante el tiempo que la actora permaneció afiliada con esa entidad, montos que serán debidamente INDEXADOS por ambas administradoras del RAIS al momento del pago, oportunidad en la que además deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, últimos aspecto en el que se **ADICIONA** la sentencia, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

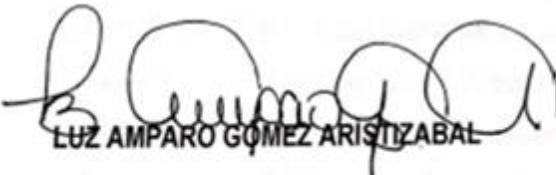
TERCERO: sin costas en esta instancia. En primera instancia se extiende la imposición de las mismas a Colfondos S.A.

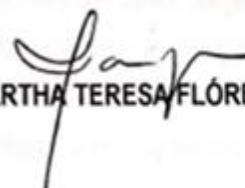
Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

(Firmas escaneadas)

Los Magistrados,


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	IRMA DORA ECHAVARRIA CANO
Demandado:	COLPENSIONES, COLFONDOS S.A, PORVENIR S.A. y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Radicado No.:	05001-31-05-002-2018-00600-01.
Decisión:	MODIFICA SENTENCIA
Fecha de la sentencia:	16/12/2022

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 19/12/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario